

C.A. de Santiago

Santiago, trece de octubre de dos mil veintiuno.

Vistos:

Por sentencia de cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT T-1653-2019, se acogió la demanda interpuesta por Jorge Jardúa Pérez en contra de la demandada Petrinovic Aeronneed SpA, declarando que el despido del denunciante fue vulneratorio de su derecho a la honra y, en consecuencia, condena a dicha demandada al pago de \$ 29.870.445, correspondiente a 11 remuneraciones; \$ 2.715.495, como indemnización sustitutiva del aviso previo; \$ 5.430.990, como indemnización por años de servicios; \$ 2.715.495 por concepto del incremento del 50% y además, ordena a la demandada, a través de su representante legal, a pedir disculpas públicas frente a los miembros de la empresa, citando al efecto a una reunión en horario de trabajo a la que deberá concurrir el denunciante y rechazó, en todo lo demás la demanda, declarando que cada una de las partes pagará sus costas.

Contra esa sentencia, la parte demandada interpuso recurso de nulidad, basado en cuatro causales subsidiarias, la primera, es la del artículo 478 letra a); la segunda, es la del artículo 478 letra c); la tercera es la del artículo 478 letra b) y la cuarta es la del artículo 477, segunda hipótesis, todas del Código del Trabajo.

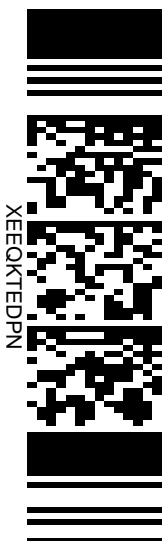
Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los abogados de ambas partes.

Considerando:

Primero: Que, como primera causal, la recurrente invoca la del artículo 478, letra a) del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente.

Argumenta que, tal como se señaló al oponer la excepción de incompetencia, basta revisar los antecedentes de hecho expuestos en la denuncia para corroborar que se está en presencia de una controversia que no tiene nada que ver con lo laboral, agregando que esta conclusión inicial se ha visto ratificada con la prueba que se rindió en el proceso, tanto por su parte como por el actor.

Sostiene que se debe prestar atención a los artículos 227 N° 4 del Código Orgánico de Tribunales y 420 del Código del Trabajo,



concluyendo que de la lectura combinada de estos preceptos legales se desprende que las diferencias que surjan entre los socios de una sociedad anónima se encuentran expresamente sustraídas de la competencia de los juzgados del trabajo, debiendo radicarse la discusión ante un juez árbitro.

Añade que, en la jurisprudencia más reciente también hay algunos pronunciamientos, tanto respecto de Juzgados de Letras del Trabajo, como de Cortes de Apelaciones, que han desechado acciones judiciales promovidas por socios en contra de las sociedades en las que cuentan con participación.

Concluye en este punto señalando que, al haberse dictado sentencia respecto a una acción cuyo contenido fáctico es totalmente ajeno a una controversia de índole laboral, el tribunal resultaba incompetente, agregando que la totalidad del relato de los hechos de la denuncia da cuenta en forma íntegra de una disputa societaria entre accionistas de la empresa.

Añade que es la misma juez a quo quien señala que todo lo que tenga que ver con una disputa societaria, es ajena a la competencia laboral y no se comprende cómo pudo haber aislado en forma mental e hipotética una circunstancia puntual, ocurrida prácticamente un mes antes del término del vínculo jurídico estrictamente laboral, ocurrida precisamente en el contexto de una actuación propia de los gobiernos corporativos, como lo es una reunión entre socios, para discutir cosas de la sociedad, para fundar en esa misma circunstancia la pretendida vulneración de derechos fundamentales.

Segundo: Que, tal como lo reconoce el recurrente, en la audiencia preparatoria, realizada el 20 de noviembre de 2019, la juez del grado se pronunció sobre la excepción de incompetencia opuesta por la demandada, rechazándola.

Sin embargo, en dicha audiencia, esa parte no dedujo recurso alguno, contra esa resolución, recibiendo luego el tribunal la causa a prueba y fijando entre esos puntos el siguiente:

“1.- Circunstancias que determinaron la terminación de la relación laboral habida entre las partes, pormenores al respecto. Si en dicho término de relación laboral fue en verbal o en definitiva obedeció a una causal de terminación del contrato.”



Más aún, en los restantes hechos controvertidos no fue establecido alguno que tuviera relación con la existencia de una relación laboral entre las partes.

De lo anterior, se deriva que el recurrente, en lo que concierne a esta causal, al no haber impugnado la demandada en la oportunidad procesal pertinente la resolución de la juez del grado que desestimó la excepción de incompetencia, con lo cual esa decisión quedó ejecutoriada, en lo que concierne a esta causal, el recurso no ha sido preparado debidamente, conforme a los artículos 478 inciso 3° y 480 inciso final del Código del Trabajo, lo que basta para desestimar este motivo de impugnación.

Tercero: Que, como causal subsidiaria, se invoca la del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior.

Reitera los fundamentos de hecho expuestos al alegar el vicio principal, sin perjuicio de recalcar que en el considerando séptimo, el juez a quo concluyó que todos los hechos fundantes de la denuncia corresponden a la judicatura arbitral, al dar cuenta de una disputa entre socios, y transcribe el referido considerando.

Afirma que al haber razonado y concluido como lo hizo en el considerando citado, mal podía la juez a quo calificar jurídicamente ese sustrato fáctico como: a) un conflicto de naturaleza laboral, entre un empleador y trabajador, regidos principalmente por un vínculo de subordinación y dependencia; b) del cual emana responsabilidad jurídica laboral.

Agrega que, al absolver posiciones, el propio actor reconoció que el contrato de trabajo fue producto de una autocontratación inconsulta y no informada al resto de los accionistas. El hecho de que los señores Jara Rabié y Jardúa Pérez hayan celebrado sus contratos de trabajo con poderes ad hoc da cuenta de la inexistencia de un real vínculo de subordinación y dependencia, conforme al principio de la realidad que informa al derecho del trabajo.

Reitera que en el audio del día 26 de junio de 2019, enviado después de la reunión entre los accionistas de la empresa, lo que se comunicó fue el contenido de las materias tratadas entre accionistas, y en ningún caso se alude al actor en tanto trabajador y con mayor



razón, entonces, no se entiende el razonamiento del tribunal a quo para ocupar esa circunstancia para sostener que el actor ha sufrido una vulneración de derechos fundamentales.

Termina en este punto señalando que la calificación jurídica en este caso radica en calificar el supuesto de hecho como un conflicto de naturaleza laboral, en circunstancias que todo el sustrato fáctico de la denuncia, prácticamente desde las páginas 1 a la 21, de lo único que se habla es de problemas entre socios. Ello con todas las consecuencias jurídicas que dicha situación trae consigo. Añade que la incorrecta calificación jurídica de las conclusiones fácticas señaladas en el fallo derivó en que el tribunal erradamente diera lugar a la denuncia, condenando al pago de las indemnizaciones y prestaciones que se indican en el fallo y que la correcta calificación jurídica de los hechos habría sido que, dado que los hechos corresponden a cuestiones de índole societario, se debía rechazar la denuncia.

Cuarto: Que la causal de errada calificación de los hechos, como se ha sostenido por esta Corte, exige que el recurrente indique en forma clara y precisa cuál es la incorrecta aplicación del derecho que ha efectuado el tribunal del grado, en torno a determinados hechos, y cuál es la correcta aplicación del derecho que propone, unido a que, siendo causal de derecho, debe fundarse en normas legales, puesto que, de otro modo, sería una simple impugnación de los hechos, lo que la causal impide, como se deriva del tenor del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo.

Sin embargo, del planteamiento del recurso, se puede inferir que el litigante insiste nuevamente en la incompetencia del tribunal, olvidando que este tema fue zanjado en la audiencia preparatoria y esa parte nada dijo al respecto.

Además, cabe consignar que si bien la magistrada de base formula consideraciones sobre la eventual competencia arbitral en algunos temas que vinculan al actor con sus socios, en el considerando octavo aborda lo relativo a la relación laboral, y desde el punto de vista de la vulneración del derecho a la honra del actor al momento del despido, reflexión que se adecúa a los indicios aportados por esa parte, que sirvieron de base para acoger la denuncia, por lo que no se divisa yerro en la calificación jurídica a



este respecto.

Por ende, en lo que se refiere al objeto de la demanda, tampoco hay una errada calificación jurídica, pues la juez, al declararse competente para conocer de esta acción, se pronunció como en derecho correspondía, accediendo a parte de las prestaciones requeridas en el libelo pretensor.

En cuanto a las consideraciones fácticas, como el registro de audio y su conexión con el despido, nada tienen que hacer esas afirmaciones en una causal de derecho como la alegada.

En tal virtud, esta causal también debe ser desestimada.

Quinto: Que, en subsidio, se invoca la causal prevista en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, por infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Indica que no se observa cómo podría sostenerse que en la especie concurre el vínculo de subordinación y dependencia, que haya puesto al actor en la posición de pedir la protección que la ley dispensa a los trabajadores, agregando que la prueba y las alegaciones de las partes de ningún modo se condicen con un vínculo de dicha naturaleza.

Señala que, en todo caso, la prueba rendida da cuenta también que en ningún caso existió la intención de ofender, tampoco que haya habido una vulneración de una regla de confidencialidad, ni nada parecido.

Afirma que por el contrario, el mismo señor Jardúa Pérez reconoció al absolver posiciones que la idea de grabar la reunión del 26 de junio de 2019 fue para «contextualizar» los hechos, lo que a las claras significa que jamás hubo una expectativa de privacidad que resguardar, por el contrario, con ese reconocimiento es evidente que fuera razonable, por el interés que podría tener para un trabajador saber respecto al destino de la empresa, que la conversación de ese día se divulgara.

Sostiene que por lo demás, si se analiza con atención el mentado audio, éste es un resumen muy preciso de la misma reunión, como se desprende del relato contenido en la propia denuncia y de ningún modo, entonces, existió una vulneración al honor del actor, ya sea desde el punto de vista subjetivo, como desde



una perspectiva objetiva.

Refiere que además quedó demostrado con la prueba rendida en el proceso, que la acusación que hizo el actor en el sentido que Petrinovic Aeroneed pretendió ofenderlo frente a clientes de la empresa, no tuvo ningún sustento y ninguna de estas circunstancias materiales fue tomada en cuenta en el fallo del juez a quo, a pesar, que se trata de hechos que se acreditaron en forma legal.

En cuanto al despido propiamente tal, el juez a quo le da relevancia a lo declarado por el testigo de su parte y lo califica de contradictorio.

Sostiene que ello no es así, porque en el mismo proceso consta que su parte, –en el correo electrónico del señor Cardoen Délano del 26 de julio de 2019–, informó al actor expresamente que podía concurrir a las dependencias de la empresa en tanto socio de ésta. Añade que el testigo de su parte si bien dijo que le parecía haber visto al actor, no señala en ninguna parte que haya sido para trabajar –todo lo contrario, según se desprende de la valoración que tenía de él– ni menos que haya dado una circunstancia de tiempo y lugar. De este modo, para concluir dándole la razón al actor, el juez a quo se basa, en esta parte, en una conjetura infundada, que no se corresponde ni en grado de conexión material ni de lógica con el resto de las pruebas.

Reitera que no existe en el proceso prueba alguna que demuestre que el señor Jardúa Pérez fue despedido verbalmente, siendo evidente, por lo demás, que el testimonio del señor Jara Rabié, al cual el juez a quo le concede verosimilitud a pesar de reconocer su calidad de testigo de oídas; además se trata de un testigo que tiene un evidente interés creado en el resultado de este litigio, atendido que él también dedujo una acción judicial en contra de la empresa, por lo que carece de la imparcialidad como para erigirlo en la base de apoyo de un razonamiento judicial como el expuesto.

Precisa que las reglas de la sana crítica manifiestamente vulneradas corresponden a las leyes de la lógica y las máximas de la experiencia.

Afirma que el juez a quo, al analizar toda la prueba rendida en juicio, tanto la aportada por su parte como por el actor, llega a una conclusión totalmente errónea y diametralmente opuesta a la que



debió haber realizado siguiendo las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, remitiéndose al análisis que hace de la prueba rendida a partir del considerando séptimo a noveno de la sentencia recurrida.

Menciona que la sentencia recurrida contiene claros hechos acreditados, pero apreciados de manera contradictoria y es evidente la carencia de eslabones lógicos entre la parte considerativa y la resolutive, explicado a su parecer, por una defectuosa apreciación de la prueba rendida en el juicio y hechos acreditados según la propia sentencia.

Sostiene que las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia dictan que: a.- En la especie, el vínculo jurídico principal entre las partes era uno de naturaleza mercantil, emanado de un contrato de sociedad que incluso los liga hasta el día de hoy. b.- Que, por su especialidad y naturaleza, los problemas entre los socios deben resolverse en la sede que legalmente les corresponde.

Señala que sin duda alguna, con todos los hechos que el tribunal tuvo a la vista, no se comprende cómo pudo apreciar la prueba con tanta desatención por las reglas legales respectivas.

Agrega que en consecuencia, como se puede apreciar, la sentencia recurrida ha infringido gravemente las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, en especial las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, por cuanto, si el juez hubiese cumplido con las mismas, habría rechazado la demanda de autos, declarado justificado el despido, con expresa condena en costas.

Sexto: Que, en lo relativo a esta causal subsidiaria, se exige que el recurso demuestre que la infracción a las normas sobre valoración de la prueba es manifiesta y, además, que se indique qué reglas de la sana crítica han sido vulneradas y de qué forma.

Pese al extenso relato que hace la recurrente en esta causal, no satisface ninguna de las exigencias antes anotadas. En efecto, en cuanto al primer punto el recurso no hace más que discrepar del ejercicio valorativo desplegado por la sentenciadora en los motivos séptimo, octavo y noveno del fallo recurrido, olvidando que la facultad de apreciar la prueba es privativa del órgano jurisdiccional, razón por lo cual no le compete a esa parte formular cómo debió haberse



ejercido ese razonamiento, ya que el énfasis del vicio alegado mediante esta vía radica en demostrar cuales fueron las infracciones a la reglas de la sana crítica, en las distintas variantes que indica el artículo 456 del Código del Ramo, pero en caso alguno criticar, sin mayor fundamento, el raciocinio valorativo que hace el juez del grado respecto de la prueba rendida.

En lo atinente al segundo aspecto, el recurso nuevamente es insuficiente, ya que solo menciona que el fallo contraviene “*las leyes de la lógica y las máximas de la experiencia*”, sin detenerse a explicar qué principio lógico o cual máxima de la experiencia son las afectadas, por lo que el arbitrio carece de fundamento en este segundo requisito.

En lo demás, el alegato del recurrente no pasa de ser un intento reiterado de retrotraer el debate a una excepción de incompetencia que fue debidamente resuelta en la audiencia preparatoria, como ya se ha sostenido en esta sentencia y que el litigante no impugnó en su oportunidad.

En consecuencia, al carecer de todo fundamento, esta causal también será desechada.

Séptimo: Que, en subsidio, se alega la causal del artículo 477, segunda hipótesis del Código del Trabajo, por infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, denunciando como infringido el artículo 489 del mismo cuerpo legal.

Arguye que en la especie no se cumplen los presupuestos de la acción de tutela por supuesta vulneración de derechos fundamentales cometida con ocasión del despido, además de las razones ya expresadas, porque el sustrato fáctico basal de dicha pretensión, no se corresponde con la regla de derecho invocada.

Precisa que, en efecto, en la denuncia –y así lo estima el juez a quo en la parte final del considerando noveno de la sentencia– se indica que la causa basal de la supuesta vulneración de derechos fundamentales radica en el envío de un audio, por parte del señor Cardoen Délano, después de la reunión sostenida el día 26 de junio de 2019. Sin embargo, el despido del actor solo se produjo, el día 6 de agosto de 2019, mientras que, en la versión del actor, el despido se produjo –sin ninguna prueba, señala– el día 26 de julio de 2019, es decir, un mes después del audio de la reunión del 26 de junio de



2019. Es decir, el hecho en cuestión no ocurrió con ocasión del despido, pues se trata de una circunstancia material ocurrida temporalmente mucho antes que el término mismo del vínculo laboral.

Añade que esa circunstancia fáctica tampoco está ni podría estar conectada materialmente con el despido, pues ambas partes están de acuerdo que después del 26 de junio de 2020 el término del contrato se produjo mucho después (más allá de que difieran respecto a la fecha exacta y sus circunstancias).

Indica que si se revisa con atención la carta de despido de 6 de agosto de 2020, en ninguna parte se divisa alguna circunstancia que pueda esgrimirse como atentatoria de derecho alguno, simplemente se comunica el término de la relación laboral.

Cita jurisprudencia y concluye que yerra por tanto el tribunal al condenar a su parte conforme a la regla indemnizatoria del artículo 489 inciso tercero del Código del Trabajo, atendido que el supuesto de hecho que se invoca en su apoyo refiere a hechos ocurridos un mes antes del despido, y por lo tanto no puede servir de soporte para la procedencia de la acción judicial intentada.

Añade que la no observancia a lo preceptuado en la norma referida, ha conllevado a que el tribunal haya dado lugar a la acción de autos, desestimando los hechos acreditados en el juicio y desestimando los propios requisitos establecidos en la ley para para condenar a su parte, estimando concurrentes los presupuestos de aplicación del artículo 489 inciso tercero del Código del Trabajo. Por el contrario, si el tribunal hubiera aplicado correctamente las disposiciones legales, habría llegado a la conclusión lógica de que ninguna sanción relacionada con el párrafo 6° del capítulo II del Libro V del Código del Trabajo, podría haberse aplicado a su representada.

Indica que esta situación provoca un daño y perjuicio patrimonial a su representada, el cual sólo puede ser reparado mediante la invalidación de la sentencia que por este acto recurre, ya que, es claro el yerro jurídico en que incurre el juez del grado al aplicar la citada norma.

Señala que por otra parte, si bien el artículo 489 inciso tercero del Código del Trabajo permite graduar la indemnización en un rango que va entre seis a once remuneraciones, el juez no puede tener libertad absoluta para establecer la condena sin atender al mérito del



proceso, agregando que es llamativo que el juez a quo, sin mayor argumentación, condene por el total de la indemnización prevista en el aludido precepto legal, en circunstancias que en el mismo fallo quedó descartado que se hubiera enviado alguna comunicación a terceros con el ánimo de denostar gratuitamente al actor –como, en cambio, se indica en la denuncia–; que se haya provocado una afectación a la libertad de trabajo del actor; y que se le haya causado algún daño extrapatrimonial.

Octavo: Que la causal del artículo 477, sobre infracción de ley, tiene como finalidad velar por una correcta aplicación del derecho a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos tenidos por probados.

Que, por lo mismo, esta causal, en su segunda hipótesis, supone la aceptación de los hechos establecidos en la sentencia, por lo que la argumentación y sustento del recurso por este motivo debe ser coincidente con ese propósito.

Del mismo modo, no es factible en esta causal impugnar el raciocinio valorativo que ha efectuado la sentencia de los medios de prueba aportados en el juicio, desde que esta apreciación incide en la determinación de los hechos de la causa, lo que –como se dijo- es ajeno al objetivo de la infracción de ley.

Por último, es necesario tener presente también que las normas que se denuncian como infringidas deben tener influencia en lo dispositivo del fallo, esto es deben revestir el carácter de decisoria litis.

Noveno: Que como puede observarse del desarrollo de esta causal lo que en rigor ataca el recurrente –como el mismo lo indica- es que *“el sustrato fáctico basal de dicha pretensión, no se corresponde con la regla de derecho invocada”*. Pues bien, el enfoque de la causal esgrimida está puesto, entonces, en la premisa fáctica, que supone la errada aplicación del artículo 489 del Código del Trabajo.

Luego, ahondando en esta tesis, señala que el despido se produjo en una fecha distinta a la fijada por la sentenciadora -26 de



julio de 2019-, circunstancia fáctica que no corresponde modificar mediante esta vía.

En efecto, si se deduce infracción de ley, el recurso está obligado a respetar los hechos que han sido establecidos en la sentencia, pues para eso hay causales específicas en el Código del Trabajo, que sirven para modificar esas premisas fácticas.

A lo anterior, cabe reiterar que no corresponde a esta Corte “revisar” la carta de despido, ni otro medio probatorio, menos en este motivo de impugnación, cuyo objetivo es solo verificar la correcta aplicación de las normas jurídicas que concurren en la especie.

Por último, tampoco puede ser objeto de análisis si la cuantía de las indemnizaciones ha sido ajustada a derecho, toda vez que la juez del grado se limitó a fijar ese monto dentro del rango que le permite el artículo 489 del Código del Trabajo, disposición que –por ende- no ha sido infringida.

Por todo lo anterior, esta postrera causal también debe ser desechada, con lo cual el recurso será rechazado.

Por las razones anteriores, más lo dispuesto en los artículos 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, se **rechaza** el recurso de nulidad deducido por la parte demandada en contra de la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la causa RIT T-1653-2019, sentencia que, en consecuencia, no es nula.

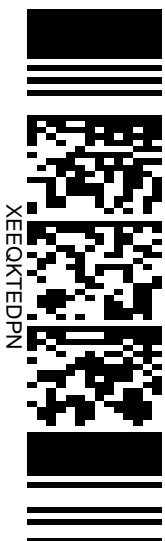
Regístrese y comuníquese.

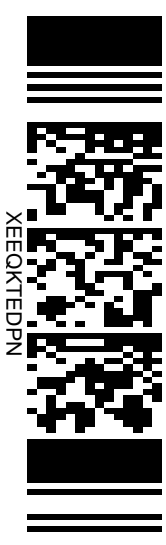
Redacción del ministro Tomás Gray.

Laboral-Cobranza N° 2.798-2020

Pronunciada por la Duodécima Sala, presidida por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo, e integrada además, por el Ministro (S) señor Alejandro Aguilar Brevis y la Abogado Integrante señora Gloria Flores Durán, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

En Santiago, trece de octubre de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.





XEEQKTEDPN

Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Tomas Gray G. y Ministro Suplente Alejandro Aguilar B. Santiago, trece de octubre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a trece de octubre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.